

Ciencias de la Educación y Humanidades

CAMPESINOS E INDÍGENAS DEL NORTE DE NICARAGUA (1980-2019) "DE LOS MILPAS Y CHILOTES A LOS AUTO-CONVOCADOS"

MSc. Uwe Paul Cruz Olivas
UNAN Managua - FAREM Matagalpa

RESUMEN

En el presente artículo se analizaron los movimientos campesinos e indígenas de los municipios de Wiwili y Bocay en los últimos 40 años, las fuentes fueron obtenidas a través de cinco años de intenso estudio arqueológico, histórico, lingüístico, antropológico y sociológico en el departamento de Jinotega. Se trabajó con documentación histórica de los municipios en mención, se implementaron los métodos y técnicas etnográficas y etnológicas para el registro de testimonios de líderes comunitarios que formaron parte de la contrarrevolución y el Ejército Popular Sandinista (1981-1990). Así mismo, discutiré la contrarreforma agraria neoliberal de (1990-2006), como las realizadas durante el gobierno de Daniel Ortega Saavedra (2007-2019), estas últimas bien aceptadas por gran parte de los campesinos de la frontera agrícola del norte de Jinotega, quienes siguen demandando más tierra, a costo del desplazamiento e invasión de los territorios indígenas de los Mayangnas y Miskitus.

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO, MOVIMIENTOS CAMPESINOS, FRONTERA AGRÍCOLA Y PUEBLOS INDÍGENAS EN EL NORTE DE JINOTEGA.

**FARMERS AND INDIGENOUS PEOPLE OF NORTHERN NICARAGUA (1980-2019)
"FROM THE MILPAS AND CHILOTES TO THE SELF-SUMMONED"**

ABSTRACT

In this article the peasant and indigenous movements of the municipalities of Wiwili and Bocay in the last 40 years were analyzed, the sources were obtained through five years of intense archaeological, historical, linguistic, anthropological and sociological study

in the department of Jinotega. We worked with historical documentation of the mentioned municipalities, the ethnographic and ethnological methods and techniques were implemented to record the testimonies of community leaders who were part of the counterrevolution and the Popular Sandinista Army (1981-1990). Likewise, I will discuss the neoliberal agrarian counter-reform of (1990-2006), such as those carried out during the government of Daniel Ortega Saavedra (2007-2019), the latter well accepted by a large part of the peasants on the agricultural frontier in northern Jinotega, who continue to demand more land, at the cost of the displacement and invasion of the indigenous territories of the Mayangnas and Miskitus.

KEYWORDS: ARMED CONFLICT, PEASANT MOVEMENTS, AGRICULTURAL FRONTIER AND INDIGENOUS PEOPLES IN NORTHERN JINOTEGA.

INTRODUCCIÓN

La Revolución Popular Sandinista empezó el 19 de julio de 1979, fecha histórica celebrada por cientos de miles de nicaragüenses, unificados bajo los principios revolucionarios del anti imperialismo, anti-intervencionismo y los valores culturales propios de nuestra cultura política. Dentro de las prioridades revolucionarias estaban erradicar el analfabetismo, desconocer los tratados "Chamorro-Bryan", mejorar el acceso a la tierra y confiscar las propiedades a las familias burguesas y oligarcas afines a la dictadura somocista. Las primeras medidas tuvieron como objetivos erradicar el analfabetismo en toda Nicaragua, la segunda tuvo un sentido geopolítico al desconocer un tratado político con los EEUU que le prohíbe al país la construcción de un canal interoceánico en un periodo de 100 años y la tercera medida estaba orientada a los grandes terratenientes vinculados a la familia Somoza, quienes

Ciencias de la Educación y Humanidades

controlaban una quinta parte de las tierras cultivables principalmente en la zona del pacífico y centro norte de Nicaragua. Particularmente, estas fueron las bases del reparto agrario sandinista para la organización estatal de la producción y la reorganización de las actividades económicas a través de las cooperativas campesinas, las cuales en su mayoría se encontraban en los territorios de las comunidades indígenas del pacífico centro y norte. Con la implementación de las innovaciones agrarias la revolución sandinista en los primeros años mejoró el sistema de crédito y democratizó la distribución de tierras. Sin embargo, para 1981 se formó en la zona fronteriza con Honduras la agrupación de mercenarios y ex guardias somocistas denominados “Los Milpas ” con 600 hombres que rechazaban la victoria popular de las milicias sandinistas. Los armados contaron con el apoyo logístico y financiero de la Agencia de Inteligencia Norteamericana (CIA) de los EEUU, quienes desde territorio hondureño venían realizando trabajos subversivos, hasta el nacimiento del “FDN ” y llegar a fundar a la contrarrevolución la que para 1986 llegó a tener 17,032, y en 1987, un año después de la reforma agraria ya sumaban 17,500 hombres en armas en la Contra (Morales, 1989; Núñez y Cardenal, 1992). Pero que sucedió con esos pueblos campesinos después de la guerra y la posguerra, bajo qué condiciones se encuentran en la actualidad las comunidades campesinas e indígena del norte de Jinotega.

DISCUSIÓN

Pese a las dificultades que atravesaba la revolución nicaragüense la implementación de la reforma agraria fue uno de los grandes logros, como la lucha contra el analfabetismo, la educación bilingüe para el caribe y la documentación de las lenguas Rama, Ulwa, Miskitu y Mayangna con el reconocimiento de sus territorios ancestrales y cosmovisión. Según un estudio del Banco Mundial citado por ACNUR:

“Las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980 han sido exitosas ya que logro invertir el patrón de tenencia de la tierra de los años setenta, haciéndolo uno de los sistemas más equitativos en toda América Latina, en el cual el 75% de la tierra de uso agrícola pertenecía a pequeños y medianos productores (ACNUR, 1991,

p.17).



Figura Nº1. Mapa de todo el territorio nacional y las principales regiones en estudio en el norte de Nicaragua. Mapa por: Fundación Ulúa Matagalpa.

Las políticas populares exitosas con la distribución de la tierra que implementaron los sandinistas en la región de Jinotega fueron boicoteadas por los Milpas contrarrevolucionarias, las que posteriormente se van a denominar “Los Chilotes” que en la cultura indígena y campesina significa el primer brote de la planta de maíz. Según el ex comando Oscar Montenegro (2018) de la Pita del Carmen, municipio de El Cua en Jinotega dice que:

“Yo me movilizaba con el comandante Tigrillo y Rubén, con el fundamos los Chilotes tiernos, las principales rutas que utilizamos fueron La Pita del Carmen, Pantasma, La gusanera, El Caño de la Cruz, La Marañoso hasta el río Coco. Teníamos orientaciones claras de buscar armas, conseguir pertrechos militares, avituallamientos, red de colaboradores y no permitimos que los alfabetizadores llegaran a las comunidades donde patrullábamos y le dábamos persecución a las casas de habitación que alojaban a los jóvenes. En varias zonas tuvimos conflictos o tiroteos como en una finca en el Caño de la Cruz”.

Así fue que en varias ocasiones la contrarrevolución imponía miedo y no respeto entre los campesinos e indígenas del norte de Jinotega, pese a dicha realidad, entre chantajes y voluntad las filas del FDN se seguía alimentando de campesinos que en muchos casos no sabían porque en realidad luchaban. Para

Ciencias de la Educación y Humanidades

En 1981 el gobierno sandinista enfrentaba ataques de los contrarrevolucionarios desde la región nor-oriental del departamento de Jinotega, el que se convirtió en un escenario principal de los conflictos armados. El FSLN, con el fin de evitar que estas comunidades pudieran servir de apoyo logístico para los contrarrevolucionarios y no afectar a poblaciones indígenas en los conflictos, decidió evacuar a más de 8,500 personas de las comunidades del Río Coco y Bocay y ubicarlos en asentamientos improvisados, garantizando condiciones para que las familias se incorporasen en la producción agrícola y pecuaria.

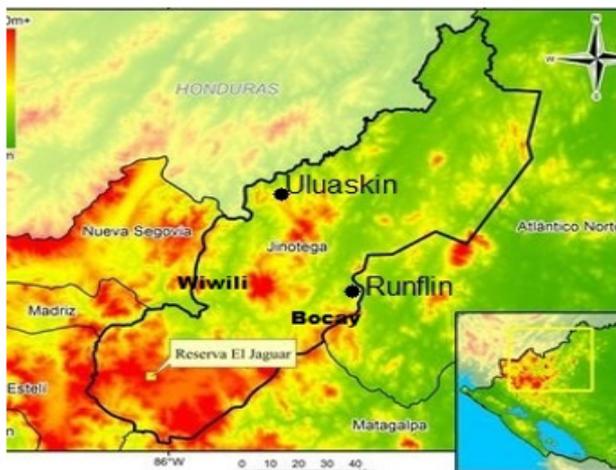


Figura N°2. Mapa del relieve del departamento de Jinotega. Fuente: Fundación Ulúa Matagalpa.

Para el caso específico de la población de las comunidades de Uluaskin en Wiwili y Amak en el municipio de San José Bocay fueron desplazados a otros municipios del departamento de Jinotega y Matagalpa. Las comunidades de Río Coco Abajo, serían ubicadas en lo que fue conocido como Tasba Pri (Tierra Libre). La operación de desalojo no fue anunciada públicamente para no alertar a las fuerzas contrarrevolucionarias, por lo que la población de las comunidades fue avisada con poca anticipación. En las comunidades, se cortaron los árboles frutales y se mató parte del ganado para asegurar que los Contras no pudieran hacer uso de éstos. Uno de los hechos en el inicio del desplazamiento que afectó a la población, fue el trágico accidente de un helicóptero por desperfectos mecánicos, que transportaba a mujeres y niños desde la

comunidad de San Andrés a la Comunidad de Ayapal. Este incidente se cobró la vida de 75 niños y niñas, juntos con ocho mujeres adultas. La Navidad Roja fue punto de mira mediático y se acusó al Frente Sandinista de violar los derechos humanos de la población miskitu. Hubo serios desacuerdos y cruce de acusaciones con el movimiento indígena de Costa Caribe en aquella época denominado MISURASATA. Posteriormente la Organización de Estados Americanos reconoció el esfuerzo del Gobierno en garantizar condiciones para la población trasladada.

La guerra poco a poco iba desgastando la frágil economía agroexportadora de Nicaragua y golpeando contundentemente a los civiles por el racionamiento de los alimentos, escases de utensilios personales, como pasta, máquinas de afeitar y otros productos importados, mientras se racionaba el arroz, aceite y azúcar. Los Contras en su mayoría eran campesinos de la frontera agrícola, en algunos casos familias productoras que dependían del mercado internacional para vender sus productos, pero al mismo tiempo, producían todos sus alimentos para la subsistencia y el excedente usado para la venta al mercado, así formaron comunidades con cierta movilidad económica y social, con mínima relación con el Estado, tal es el caso de la comarca Runflin en Bocay, donde el líder comunitario José Sixto González Hernández (2015) quien dijo que:

“Yo fui comando de la contra, mi alias era “Rafael”, así me conocen aquí. Anduve en las tropas de varios comandantes entre ellos, el difunto comandante “Masaya” y “Tiro al Blanco”, “Tigrillo”, con “Solín Chele”, “inventarios”, “Iván Perdido” y “Dimas”. Recuerdo las operaciones de Bocay de 1987, fueron operaciones que hicimos viniendo de Honduras cuando atacamos el 1° de junio al EPS. Al mando veníamos de los comandantes “Toño” y “Gato 31”, éramos una tropa de 800 hombres en una fuerza que se denominaba Juan Castro en honor a un caído. En esos combates me pegaron un tiro en el pie derecho y herido puede salir hasta Honduras, ahora estamos en paz y defendemos esta paz” (Mario Rizo, 2015).

Ciencias de la Educación y Humanidades

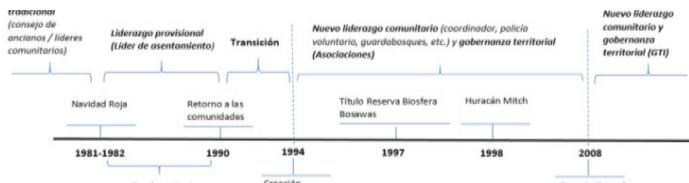


Figura Nº3. Cronograma histórico de los Pueblos Indígenas del municipio de Wiwili y Bocay en el departamento de Jinotega. Fuente: Paul Cruz.

En Runflin el espectro de la guerra se puede percibir en las evidencias de sus montañas, donde todavía se pueden encontrar antiguas cantimploras y latas de sardinas que fueron utilizadas por las columnas del extinto EPS, la comarca fue uno de los antiguos refugios primordiales para la Contras donde fácilmente podían continuar con su ruta hacia el norte en dirección a la comunidad de Olaskin, Olaskinon y llegar así al territorio indígena de Uluaskin, donde según líder indígena Ambrosio Ocampo (2018) dice que:

“Nuestros líderes no hablaban muy bien el hispai o español y por nuestros años de abandono de nuestros territorios no conocíamos muy bien lo que pasaba en Managua y menos luego cuando nos invadieron los rearmados, quienes venían exigiendo tierras, mujeres y apoyo militar para derrocar el comunismo sandinista”

Entre 1987 y 1988 el gobierno revolucionario implementó el Plan de Ajuste que residió en una reforma monetaria, que consistía en devaluar el córdoba respecto al dólar en una relación del 80 a 1, esta difícil situación aumentó el descontento de un amplio sector de la población campesina y urbana quienes históricamente han tenido dependencia y seguridad en la primera moneda de intercambio internacional. Pero no doblegaba a los sandinistas revolucionarios, que mantuvieron un gobierno bajo un embargo económico, carencias de productos y una alta inflación de una economía de guerra. Las medidas del Plan Ajuste consistieron en ajuste salarial, centralismo político, reestructuración económica, crediticia, renegociación de las deudas bancarias, la liberalización de los precios y salarios, reducción en el presupuesto de salud y educación. Para 1989 el empleo público disminuyó,

afectando a 50, 000 mil personas, mientras la tasa de desempleo rondaba el 28% (Carlos Vilas, 1993). Las carencias y dificultades de los nicaragüenses se sentían en las necesidades básicas de subsistencia, tras décadas de dependencia comercial con los EEUU, quien termina imponiendo un embargo económico desde 1983 y una guerra al país, que le costó más de 50, 000 vidas humanas y más de 16, 000 víctimas de guerra de ambos bandos.

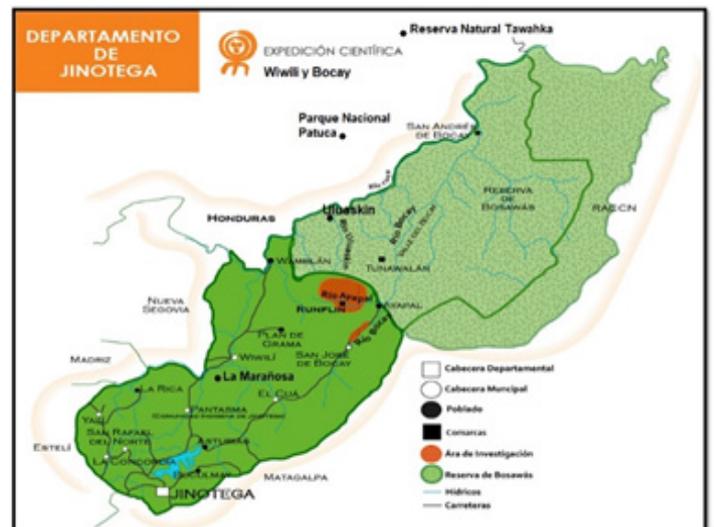


Figura Nº4. Territorio trabajado durante los últimos 4 años. Mapa por: Fundación Ulúa Matagalpa.

Para las elecciones de 1990 la crisis económica y política en el país era muy profunda a causa de la imposición bélica, con la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro los movilizados campesinos de la Contra se lanzarían sobre los territorios de las comunidades indígenas desalojadas por el conflicto armado, de esta manera muchas familias campesinas se asentaron en las antiguas aldeas indígenas asentadas en las riveras del río Ayapal y Runflin. El gobierno de Chamorro anunció una propuesta de ley relativa a la revisión de las confiscaciones sandinistas, buscando beneficiar a todas las familias vinculadas a los Somoza y aceptores burgueses que se vieron afectados durante el gobierno revolucionario. En los hechos se trató de la primera contra reforma agraria de corte netamente neoliberal que se desarrollaría en el país, otra transformación fue la libertad comercial para los campesinos y productores para que ellos decidieron a quien venderle sus productos, al mismo tiempo, se privatizaron todas las empresas del

Ciencias de la Educación y Humanidades

Estado heredadas del gobierno revolucionario (INCEP, 1994). Como muestra del beneplácito el gobierno de los EEUU aprobó inmediatamente un paquete de ayuda económico de 300\$ millones de dólares, mismos que fueron condicionados por los norteamericanos al realizar un desembolso de 147\$ millones, esta acción complicó más al gobierno neoliberal, pues era en los meses donde más se necesitaban fondos para la reducción del Ejército Popular Sandinista (EPS) y al Ministerio del Interior (MINT) al que se le obligó a retirar a una buena parte de sus miembros, por el otro lado, se desmovilizó a 22, 413 combatientes de la Contrarrevolución (UNO, 1990 p.8). Mismos que fueron patrocinados por las agencias de seguridad de los EEUU que operaban ilegalmente el conflicto armado desde territorio hondureño. Así mismo, los EEUU impuso a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) quien debía de administrar los 300 millones de dólares otorgados en préstamos de los cuales, sólo un 10% se destinó a la desmovilización de los Contras y los restantes 90% iban destinados al gobierno neoliberal de Violeta Barrios de Chamorro.

Para 1990 existían 60, 000 demandantes de tierras y más 2,000, 000 millones de familias campesinas e indígenas afectadas por el problema de la propiedad, además de más de 6,000 mil ex propietarios que exigían la devolución de las tierras confiscadas por la revolución sandinista. Así fue que el gobierno neoliberal vendió las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), como un mecanismo de privatización y devolución de las propiedades del Área de Propiedad del Pueblo (APP), que representaba para 1990 aproximadamente el 40% del producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua y empleaba a más de 78, 000 trabajadores, sin embargo, el gobierno neoliberal no le interesaba el pueblo empobrecido y no tardó en desmembrar y privatizar las tierras a beneficios de los mismos grupos de poder excluyentes. Además, el gobierno condonaría de manera ilegal la deuda de 16, 000,000 millones de dólares que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya con sede en Holanda falló a favor de Nicaragua, responsabilizando a los EEUU de violar el derecho internacional al apoyar a la oposición armada y ser el principal promotor de

la guerra en el país. Sin embargo, con la condonación ilícita de la deuda histórica, las clases políticas tradicionales de familias liberales y conservadoras, oligarcas y burgueses se repartieron jugosos préstamos económicos y rápidamente se volvieron a enriquecer a merced de las inmensas mayorías de nicaragüenses empobrecidas en el campo y las ciudades.

Así fue que el Estado nicaragüense dejaría de ser el principal empleador en el país y se convertiría en el principal consumidor de los contribuyentes, para 1990 proporcionó a penas 285, 000 empleos y al final del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1996 alcanzaría tan sólo 77,000 (Monroy, 2001). Al mismo tiempo, el gobierno de transición promovió las importaciones, las disminuciones de los aranceles, la libertad cambiaria, la eliminación de subsidios para las clases pobres, pero no para la burguesía y oligarquía quienes pagarían ridículas tasas de impuesto en las importaciones de autos y otros artículos, además de las exoneraciones, los créditos y las tasas bajas de interés, disminuirían el papel del Estado en la economía nacional y privatizarán sus activos a corporaciones internacionales, sociedades anónimas y grupos de poder tradicional, pasando a ser el sector privado el único motor de la incipiente economía nacional (Juan Arancibia, 1993). De esta manera, la legislación nicaragüense aprobaría la inversión extranjera instaurando las maquilas y las zonas francas, donde la explotación capitalista se intensificaba, sin embargo, la necesidad del pueblo forzó a miles de mujeres y madres solteras a buscar empleos con salarios fijos. Con la implementación del neoliberalismo nunca se llegó a cumplir las promesas electorales que llevaron al poder político a Violeta Barrios de Chamorro, pues la recuperación económica de Nicaragua nunca llegó y a partir de 1990 a 1992 la combinación criminal del desempleo, subempleo y la pobreza extrema cubrió a más de dos tercios de la población económicamente activa (Carlos Vilas, 1994, pág.260).

Durante los años de posguerra, los ricos disminuían en número y aumentaban en riquezas, mientras los pobres aumentaban en número y disminuían en riquezas, increíblemente la población empobreció más rápidamente, incluso más que durante los duros años

Ciencias de la Educación y Humanidades

de la guerra impuesta por EEUU. La única diferencia muy marcada estaba en el discurso de la “democracia” desigual promovida por el gobierno neoliberal (Verónica Rueda, 2019). Las respuestas populares contra las políticas neoliberales de Barrios no se hicieron esperar y cientos de personas empezaron a organizar independientemente o dentro del FSLN para crear los primeros “tranques”, término popular para referirse al cierre de las principales vías de comunicación, una estrategia urbana nueva en el país que resultaba más dañina para la economía frágil y condicionada de Nicaragua.

Los tranques fueron organizados en buena manera por los sandinistas quienes se encontraban completamente en desacuerdo con las políticas neoliberales de Violeta Barrios de Chamorro quien no sólo había condonado ilegalmente una deuda de más de 16, 000,000 millones de dólares, sino que aceptó una ayuda condicionada de EEUU que el pueblo nunca recibió por la amplia corrupción del gobierno neoliberal. A estas acciones le siguieron múltiples huelgas sindicales entre ellos los gremios de maestros y enfermeras, además de huelgas de hambres de militares retirados y las constantes luchas estudiantiles de más de dos meses de huelga en 1992 contra los recortes inconstitucionales del presupuesto Universitario conocido popularmente como el 6%. Para septiembre de 1993 tuvo lugar el paro nacional de transportistas que paralizó al país por varios días, estos tranques desestabilizaban la macro y micro economía, bajo este contexto el gobierno neoliberal desesperado trato de obtener fondos frescos, a través de la venta de empresas y propiedades estatales de la CORNAP, desmantelando gran parte de los bienes que tenía el Estado. Al mismo tiempo, los políticos le apostaron al crecimiento agrícola y ganadero del país con la venta de las propiedades y de empresas estatales, pues la tierra podía entregársele a los ex comandos para hacerlas producir y con ello se dinamizaría la economía nacional y abastecería el mercado interno y externo.

Omitiendo el complejo problema de la propiedad privada, pues a la fecha ya habían más de 6,000 reclamos que exigían la restitución de las propiedades confiscadas a las familias afectadas. Dentro las contradicciones generales estaban más de 800 somocistas empeñados en destruir al FSLN, revertir las transformaciones agrarias y urbanas contra 30,000 familias beneficiadas, entre ellas tenemos 120,000 mil favorecidas por la

reforma agraria y más de 60,000 desmovilizados de la Contra, cuyo nombre oficial después de la guerra fue (RN). Además, de los retirados del EPS y trabajadores participantes del proceso de privatización, se hacían unos 2,000,000 millones de personas involucradas en los problemas de titulación, es decir casi de la mitad de la población nicaragüense (Verónica Rueda, 2019).

A partir de la venta ilícita de las propiedades, empresas del estado y la institucionalización del neoliberalismo aparece un nuevo actor social sediento de tierras aptas para el cultivo y bajo costos, este sujeto serán los extranjeros inversionistas quienes fueron beneficiados con las concesiones extractivistas. Como la licencia a la empresa minera norteamericana “Gold Neptune Company” a quien se le concedió explotar las regiones auríferas más importantes del caribe norte. Al mismo tiempo, se le otorgó a “Atlantic Timbres Corporation” (ATMICO) unas 8, 333 hectáreas de bosques vírgenes en el caribe sur y posteriormente le cedieron 55,000 hectáreas de selva tropical húmeda para la explotación de recursos madereros, sin la indemnización del Estado y menos de las comunidades del caribe sur. Según don Victorino Benavidez (2016) líder campesino de la comarca de Runflin nos dice que:

“A nosotros los fundadores de la Contra en Bocay Jinotega, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro no nos entregó lo que prometió, ni tierras, ni semillas, ni viviendas, ni animales y menos herramientas para el trabajo de la agricultura”

El testimonio del líder es contundente cuando habla indignado sobre las promesas no cumplidas por la administración de Barrios, quien lo dejó en la eterna espera, dejando así a miles de familias campesinas indefensas y condenadas a la pobreza extrema hasta nuestros días. Según Ruedas (2019) eran alrededor de 22, 413 comando de la (RN), más 72, 000 del EPS y unos 5, 100 del MINT, la mayoría de los Contra querían regresar al campo, pero no tuvieron los apoyos suficientes por parte de los EEUU quien una vez entregada las armas corto todo apoyo o financiamiento a los campesinos (pág.10). Bajo este contexto fue que los excombatientes del norte de Jinotega tuvieron como única solución otra vez el rearme campesino ante las políticas neoliberales del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

Reclamando tierras para 5,000 desmovilizados y colaboradores de la Resistencia Nicaragüense, los

Ciencias de la Educación y Humanidades

cuales ya no era útil a las políticas hegemónicas del imperialismo norteamericano y menos para la clase política criolla del país. Durante los primeros años de la posguerra, la amplia demanda de la tierra demostró la falta de planificación del gobierno para atender a este sector fundamental de la sociedad nicaragüense, así ante la imposibilidad de entregar las regiones tradicionales de Matagalpa y Jinotega de producción, se promovió el avance de la frontera agrícola a las regiones más lejanas como el caso de las comunidades indígenas de Wiwili, Bocay y otras regiones del Caribe nicaragüense. Los ataques a fincas ganaderas y cafetaleras no se hacían esperar en los municipios de Wiwili y Bocay, luego fueron los poblados, los pequeños centros de policía y los puestos de mandos del ejército, cierre de carreteras, tomas de iglesias entre ellas la catedral de Managua y hasta la sede de diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIAV-OEA, la embajada venezolana, la colombiana e incluso la de Nicaragua en Costa Rica. Particularmente los municipios del norte de Jinotega seguían siendo los escenarios más crudos de revueltas de campesinos e indígenas. Para complicar más el asunto, el gobierno neoliberal decidió en 1993 firmar un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las que incluyó nuevas políticas restrictivas o, mejor dicho, un nuevo paquetazo neoliberal.

En 1995 la Policía Nacional había investigado 48,737 delitos, si nos ponemos a comparar con los delitos ocurridos en 1985 en el fragor de la guerra habían sido 15,189, en pocas palabras podemos afirmar que durante la posguerra fue en muchos sentidos tan violenta como la guerra de 1980. Para el 20 de enero de 1992 y febrero de 1995, por medio de la Brigada Especial de Desarme (BED), desmovilizó a 131 grupos y 24, 419 hombres (Arévalo, 2007). El rearme fue el resultado de un proceso organizativo de un sector importante de excombatientes de origen indígena y campesinos mestizos que ejercieron presión por medio de las armas para presionar entregar tierras, sin embargo, durante los primeros años de la posguerra la gran cantidad de demanda por el acceso a la tierra demostró la incapacidad del entonces gobierno de resolver sus promesas. Como resultado de lo narrado, en el corto y mediano plazo, en los municipios de Wiwili y Bocay las principales zonas de bosque se fueron convirtiendo

en áreas de agricultura descontrolada y no organizada, los campesinos se fueron extendiendo en detrimento del medio ambiente, empujando cada vez más a las profundidades de la montaña a los indígenas Mayangna y Miskitu quienes no luchaban por una parcela de tierra de cultivo, sino por la reivindicación histórica de sus territorios ancestrales. No obstante, paralelamente a la lucha de reivindicación territorial indígena en las regiones del alto y bajo Wangki, hay que sumarle las fuertes presiones de los campesinos rearmados de la frontera agrícola de los municipios de Wiwili y Bocay para obtener tierras legales.

MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ARNOLDO ALEMÁN Y ENRIQUE BOLAÑOS

Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1996-2001) rotundamente se evitó la negociación con los campesinos e indígenas, dándole prioridad al combate frontal contra de los excombatientes en armas de los ex militares del EPS y de la Contra quienes continuaban exigiendo la reivindicación de tierras en Jinotega. Sin embargo, el gobierno apostó por el descabezamiento de los principales líderes rearmados, a través de la compra o el soborno de los mismos. No obstante, para 1997 por las difíciles circunstancias políticas que vivía el país, forzó a la administración de Arnoldo Alemán a reactivar obligatoriamente a la Brigada Especial de Desarme (BED), la misma que en un año de labores desmovilizó a más de 1,882 hombres con 716 armas (Raúl Arévalo, 2007, pág.60).

Según Verónica Ruedas (2019) un nuevo acuerdo fue firmado el 30 de mayo de 1997 con el Frente Norte 380 un grupo enfrascado en acciones meramente delincuenciales, el mismo, Frente Norte 380 fue la agrupación armada que más daño causó en los municipios de Wiwili y Bocay. Para un febrero de 1999 se firmó el último acuerdo con los grupos rearmados del Yatama siendo beneficiados aproximadamente unos 1,500 indígenas Miskitu. Sin embargo, para el año 2000 todavía en la zona del triángulo minero de Siuna, Bonanza y Rosita había reductos de campesinos rearmados del Frente Norte 380 que para su época sólo se dedicaban a secuestros y extorsiones, pero no a reivindicaciones sociales de excombatientes (pág.12).

Posteriormente el Ejército movilizó a 1,500 efectivos

Ciencias de la Educación y Humanidades

para dar lucha contra los rearmados del norte del país, para aniquilar sus bases, logísticas y organización delincriminal. Mientras las ONG's como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Asociación Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaban los planes contra los rearmados, solicitando amnistía, sin embargo, el gobierno de Arnoldo Alemán argumentó que esas acciones reforzarán la impunidad y debilitarían el estado de derecho del país y en medio de flagrantes violaciones a los DDHH el gobierno neoliberal decidió desaparecer por completo a último (acento) grupo de rearmados en Nicaragua, sin que ninguna organización internacional defensoras de los derechos humanos se pronunciara al respecto ni la (CIDH) y menos la (OEA).

Arnoldo Alemán continuó con los planes de un nuevo embate a la propiedad campesina e indígena en el país, a través de las mismas políticas de contrarreforma agraria implementada por Chamorro. Para 1998 según los datos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), un millón de hectáreas habían pasado a mano de nuevos latifundistas, sumado a que las políticas neoliberales de crédito, públicas como privadas favorecían al inversionista extranjero y a las clases económicamente pudientes de Nicaragua. A la cabeza de los beneficiados se encontraba el mismo presidente Arnoldo Alemán quien de la noche a la mañana se convirtió en propietario de varias fincas a la que le construyó caminos de acceso con el dinero de los contribuyentes. En palabras de Álvaro Fiallos, quien en ese entonces era el presidente de la UNAG dijo públicamente que:

“Más que un presidente tenemos un patrón de finca”

Para 1998 las circunstancias empeoraron para los campesinos e indígenas de Wiwili y Bocoy con la llegada del Huracán Mitch que causó desastres en las comunidades indígenas del alto y bajo Wangki hasta volverlos a movilizar de sus territorios ancestrales los cuales se encontraban completamente inundados. Tras el fenómeno natural se arruinó aproximadamente el 15% de la producción agropecuaria nacional, más el 40% del área de siembra de frijoles, el 32% de las

áreas de producción de maíz y en la zona del Poteca a río Coco fallecieron 1650 personas enterradas entre indígenas y mestizos. La devastación del Huracán se notó con la pérdida de más de 10 mil personas, miles de desaparecidos y damnificados.

Sobre todo, porque la tragedia representó, además, uno de los capítulos más negros en la historia de Nicaragua, por el mal manejo de los recursos financieros donados por la cooperación internacional para atender a los miles de damnificados, desaparecidos, activar los albergues y la logística para hacerle frente al fenómeno natural. Las investigaciones de la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR) identificó y estableció que 412,861.13 millones de dólares de la ayuda recibida para la reconstrucción del país, fueron desviadas para usos personales de algunos funcionarios públicos durante el periodo presidencial de Arnoldo Alemán. Durante este contexto político, el país se encontraba ante los hechos de corrupción más sonados de la presente historia nacional y es así, que se logró abrir a un juicio político contra el ex mandatario. Para el año 2002 el Ing. Enrique Bolaños llegó a la presidencia, durante su admiración intento luchar contra la corrupción de su antecesor sin mucho éxito, debido a que el mismo forma parte de muchas de las cortinas de humo que había construido el ex presidente Arnoldo Alemán. Sin embargo, dentro de los elementos positivos que se lograron bajo esta administración fue la condonación del 86% de la deuda pública con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dos años después el Fondo Monetario Internacional (FMI) condonaría 800 millones de dólares, mismo que fue condonado con el compromiso de mantener el ajuste a la economía según los criterios de la organización internacional hasta el año 2011 (Verónica Rueda, 2019).

Con la crisis económica en el campo y la ciudad por las medidas de austeridad del gobierno y del FMI, forzó a miles de nicaragüenses a migrar a Costa Rica, España y los EEUU, pues sólo el 10% del total del crédito se otorgó al sector agropecuario, por ello, durante el año 2006, eran 800 millones anuales en remesas. Durante el gobierno de Bolaños, la inversión en infraestructura fue para las zonas francas de maquila, con la mano de obra peor pagada de Centroamérica, descuidando por completo las reivindicaciones a los campesinos mestizos

Ciencias de la Educación y Humanidades

de la frontera agrícola y omitiendo las demandas de los pueblos indígenas sobre los gobiernos territoriales de Wiwili y Bocay.

Los retos de los campesinos de la frontera agrícola de Wiwili y Bocay durante el gobierno del Ing. Enrique Bolaños fueron difíciles, en primer lugar, la crisis del café y el segundo, el caso del Nemaqón. Durante la crisis cafetalera los precios cayeron drásticamente durante el 2001, debido a la sobre oferta de 10 millones de sacos, el precio se mantuvo por debajo de los 50 centavos de dólares la libra, el más bajo en 50 años afectando a los principales departamentos del norte de Nicaragua. Según los datos estadísticos de la CEPAL (2002) la crisis cafetalera afectó a unos 300,000 productores centroamericanos, en Nicaragua los productores bajaron los salarios y pagaron en especies a sus empleados, menos que contrataran a mujeres indígenas y campesinas quienes llegaban en temporada a los cortes de café a las fincas.

Las familias campesinas e indígenas en Matagalpa y Jinotega fueron afectadas directamente durante la crisis, familias enteras viviendo en la pobreza extrema, sin empleos y sin darse cuenta que el señor cafetalero o ganadero fue quien le arrebató sus tierras comunales y los convirtió en peones agrícolas sin tierras. En medio de la crisis quebraron dos bancos, muchas haciendas fueron abandonadas y otras embargadas por no cumplir con sus compromisos crediticios. En enero del 2002 los trabajadores dispersos en las fincas cafetaleras y gran parte de los líderes de la comunidad indígena de Matagalpa se tomaron las carreteras principales del departamento, entre enero y octubre de ese año murieron por hambre 21 indígenas que estaban en los plantones, se encontraban desempleados y acompañado de sus familias, 14 de los fallecidos eran menores de edad. El 13 de septiembre se logró firmar un acuerdo llamado Las Tunas como paliativo a la trágica situación en la que vivían las familias indígenas y campesinas del departamento de Matagalpa, mientras el ejecutivo se comprometió a entregar un bono de apoyo a las familias afectadas, reaperturas y ampliación de comedores infantiles en áreas rurales y tierra a los sin tierra.

Asimismo, otro sonado caso se dio para el año 2005 con el Nemaqón, cuando se dio una marcha de campesinos

e indígenas de por lo menos unas 3,000 personas en representación de 80,000 afectados por la exposición directa o indirecta del pesticida comercialmente conocido como Nemaqón y Fumazone, los trabajadores recorrieron a pie 150 kilómetros hasta llegar a Managua de Chinandega. Donde se realizaron marchas multitudinarias, al mismo tiempo se informaba que unos 2,000 afectados había muerto en los últimos años, los sobrevivientes exigían una indemnización de 17,000 millones de dólares a la familia Pellas, una de las más ricas del istmo y la población exigía el apoyo del gobierno.

Una vez más los gobiernos neoliberales de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños alimentaron la corrupción en todos los espacios sociales, favoreciendo a las minorías ricas del país, mientras trastocaban la vida de los campesinos e indígenas empobrecidos, durante los 16 años de neoliberalismo salvaje. La vida agrícola dejó de ser rentable y la migración a las principales ciudades del norte del país iban en incremento, según un estudio elaborado por la CEPAL (2007), muestra que los principales rubros de producción como son maíz y frijol no se habían mejorado en los últimos 40 años, pese a que se trataba de uno de los principales cultivos para la dieta local y son los cultivos que más área de siembra posee (Carlos Vivas, 2007, p.35). Así fue que entre los años 2001 y 2005, la población campesina e indígena rural empezó a migrar de una manera acelerada, es decir la migración había sido menos durante los años de los rearmados que durante los años “pacíficos”.

MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE DANIEL ORTEGA.

Con el retorno del FSLN al poder en Nicaragua, en el 2007 el país se encontraba en una de las crisis energéticas más grave de la historia republicana, sumado a la profunda crisis de los campesinos e indígenas de Chinandega víctimas del Nemaqón. Además, de las familias campesinas e indígenas de Jinotega que se encontraban sumidos en la miseria, los rearmados, la pobreza extrema, la desigualdad de género, la

Ciencias de la Educación y Humanidades

privatización de la salud, educación entre otros males del neoliberalismo. La expansión de la ganadería y la agricultura no había mejorado las condiciones del campesino y de los indígenas durante la posguerra, en el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Fondo Monetario Mundial (FMI) y el Banco Mundial (BM), insistieron en que la solución a la crisis de alimentos estaba en impulsar la agricultura familiar (Armando Bartra, 2006).

Una vez asumida la presidencia Daniel Ortega Saavedra, desde el primer día decretó que la salud, la educación serían sectores públicos priorizados durante su mandato, también, creó los Gobiernos Territoriales Indígenas del alto y bajo Wangki, reivindicando una demanda histórica para los grupos Miskitu y Mayangnas, al mismo tiempo, en la Asamblea Nacional se creó una Secretaría de Asuntos Étnicos que sirve como herramienta para los pueblos originarios de Nicaragua puedan demandarle al Estado apoyo e inversión pública. El gobierno progresista del FSLN con el apoyo de Venezuela logró superar la crisis energética del país, así mismo, con fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) realizó una serie de programas como Hambre Cero y Usura Cero que fueron dirigidos a los campesinos de la frontera agrícola y los indígenas de Matagalpa y Jinotega, los programas tenían la finalidad de promover la producción alimentaria y el acceso a créditos.

El éxito de los programas implementados por el gobierno sandinista es innegable, también la reivindicación femenina, las transformaciones al seguro social (INSS), las pensiones reducidas a miles de familias que no lograron cotizar las 360 semanas, en el campo de la salud se dieron los mejores logros, disminuyendo la morbilidad materna, infantil de niños de 0 a 5 años, se crearon millones de casas maternas para las mujeres indígenas y campesinas. También, se construyeron los hospitales primarios a nivel nacional, la remodelación de los hospitales de mayor data, la inclusión del plan para adultos mayores, la integración a la sociedad de los pacientes con VIH/SIDA positivo, el plan de vacunación gratuito. Otro logro fue, la mitigación de la mortalidad infantil de 0 a 5 años, la disminución de la desnutrición en niños de 0 a 5 años, las implementaciones de distintas normas para los

diferentes sectores de la salud. La fusión de la medicina natural con la medicina occidental, la implementación de las clínicas móviles, la implementación de los hospitales escuelas en todo el territorio nacional ha sido uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra.

También, las universidades públicas incrementaron el número de becas a millones de bachilleres que no tenían oportunidad de estudiar en Managua, Estelí, Matagalpa, Carazo, Jinotega, Nueva Segovia, Bluefields o Puerto Cabezas; con ello se incrementaron mayormente las plazas de trabajo, gracias al 6% constitucional que durante 16 años fue una lucha de todos los días ante los gobiernos neoliberales. Los logros del gobierno son innegables, como sus desaciertos, sin embargo, la tenacidad del trabajo, la cohesión social del partido y el coraje de lucha por sacar de la pobreza, a miles de ciudadanos que, con la firmeza, mística, coraje y con el compromiso social a la patria decidió desarrollar este país empobrecido.

De esta manera, la inversión en el sector turismo fue uno de los logros más importantes del gobierno revolucionario, con ello la reducción de la pobreza extrema y pobreza se lograron reducir gradualmente de un 48% aún 20%. Al mismo tiempo, el gobierno garantizó la alianza de consenso entre el sector público y privado desde donde se negociaba el salario mínimo y las transformaciones al seguro social, al que los gobiernos neoliberales habían dejado en banca rota. Desde entonces, el gobierno sandinista tiene 11 años de ardua lucha por transformar Nicaragua en uno de los países más seguro del mundo, donde las mujeres tienen igualdad de oportunidades que los hombres y los inversionistas extranjeros puedan trabajar en un ambiente seguro y competitivo

Entre el 2010 al 2018 fueron años donde se empezaron a construir varios Hoteles tipo resort principalmente en el departamento de Rivas, estos negocios incluyen campos de golf, extensas playas, clubes hípicas y demás infraestructura que evidentemente se nutre de grandes extensiones de tierra. En la zona abundan los empresarios internacionales y nacionales como el millonario Carlos Pellas “el hombre más rico del país”, quien, además de invertir en el Ron Flor de Caña, importa vehículos japoneses, dueño de bancos y ha incursionado con el complejo turístico llamado

Ciencias de la Educación y Humanidades

“Gucalito de la Isla”, el que tiene una extensión de 6.5 kilómetros cuadrados.

Así mismo, el gobierno sandinista le apostó a la inversión extranjera por medio del turismo y la continuidad de las concesiones de extracción de minerales, dentro de los sectores priorizados los más fructíferos fueron el turístico y la minería, cuya producción de oro en onza troy creció en un 220% entre el 2006-2016, es decir durante los primeros 10 años de mandato de Daniel Ortega. De esta manera, el gobierno sandinista proclamaría a Nicaragua como país de vocación minero y se puso énfasis en ello desde el año 2012, lo que conllevó a una presión por la tierra principalmente en las regiones auríferas de Chontales y en Rancho Grande Matagalpa.

Desde la década de 1990 varias empresas solicitaron permiso de explotación minera en la zona, tras años de investigaciones geológicas la compañía canadiense Radius Gold encontró yacimientos auríferos y posteriormente para el 2005 la alcaldía liberal de Rancho Grande concedió el permiso de explotación a través de una subsidiaria local. La comunidad al inicio no manifestó explícitamente su descontento, hasta que empezaron los problemas con el medio ambiente, las sequías del río Yaoska y las precarias condiciones laborales de los 150 planeadores de minas, según los datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, 2016). Desde el 2010 iniciaron las protestas campesinas e indígenas que contó con el respaldo total de las iglesias evangélicas, católicas y acompañados por ONG's, en su momento la alcaldía municipal de Matiguas, pasó hacer de administración sandinista la que en su momento apoyó a la corporación minera, pese las protestas de la población urbana y rural, sin embargo, para octubre del año 2015 el gobierno de Daniel Ortega, quien haciendo caso a 6,000 firmas manifestó su rechazo y a través de MARENA se le quitó el permiso ambiental a la empresa canadiense.

Mientras en los municipios de Wiwili y Bocay, no existen empresas mineras, pero si extracción de oro del río Coco de manera artesanal, acción no tan destructiva, pero igual de contaminante, porque el mercurio tiene numerosos efectos negativos en las personas y en los animales, contamina el agua, aire, suelos y posteriormente termina afectando severamente la salud

de los indígenas y mestizos que se dedican a la minaría. En este sentido, en Nicaragua desde la revolución liberal, pasando por la lucha del general Sandino, la dictadura somocista, la revolución popular sandinista, los gobiernos neoliberales y la última administración progresista del comandante Daniel Ortega, el país no ha transformado su estructura económica al grado que seguimos produciendo los mismos bienes que a finales del siglo XVIII.

Asimismo, el gobierno de Daniel Ortega continuó con las políticas extractivista de los presidentes antecesores, con la combinación exitosa de los programas sociales que han dado excelentes resultados a los campesinos e indígenas de la frontera agrícola, para el año 2012 el mismo FMI, le sugería al gobierno que modificara los años de jubilación y que cortara los subsidios a las universidades. La Unan Managua salió a las calles a protestar no contra el gobierno, sino contra el FMI y sus paquetazos neoliberales, sin embargo, la política de conceso entre los afectados logró tener resultados exitosos, a tal punto que la deuda con el organismo internacional llegó a cero (AFP, 2016).

Otra muestra de las excelentes relaciones del gobierno sandinista con el capital transnacional es la Inversión Extranjera Directa (IED), se va incrementando constantemente entre enero del 2005 y 2009, el crecimiento nacional fue 394 millones de dólares, en el 2011, iniciando el segundo mandato del Daniel Ortega, fue de 936 y en el 2012 alcanzó los 768 millones de dólares. Para el 2013 sumaba 816 millones de dólares, en el 2014 eran 884 millones de dólares de ingresos de la Inversión Extranjera Directa, sin embargo, el pico más alto fue para el año 2015 cuando alcanzó 950 millones, pero en el año 2016 y 2017 se registraría una caída del -2 en relación a los años anteriores al obtener 897 millones de dólares (CEPAL, 2018, pág.30).

Siendo sustantiva la inversión extranjera para el desarrollo del país, así fue que el gobierno sandinista seducido ante la inversión externa, aprobó polémica ley Canalera en Nicaragua, a partir del 2013 el inversionista Wang Jin cuenta con un plazo de 16 años para buscar el total del financiamiento para la construcción del sueño nicaragüense y los mega proyectos que lo acompañan. Los resultados de la ley 800 y 840 se dividen básicamente en dos, por un lado, los que están apoyando la mega obra y por el otro, los detractores

Ciencias de la Educación y Humanidades

de la misma (Jan Gerrt, 2014). En el departamento de Rivas serían 9 las comunidades afectadas entre la zona de Tola y en las cercanías del río Brito, en San Jorge 6 comunidades, en Ometepe 2 comunidades y en San Juan del Sur 2 comunidades, mientras en San Carlos serían 9 las comunidades afectadas entre ellos, El Tule y San Miguelito. En Nueva Guinea se verán afectados 38 comunidades entre ellas La Fonseca de donde saldría la campesina Francisca Ramírez conocida popularmente como “Chica”, en Bluefields serán afectadas 60 comunidades incluyendo Punta Águila y la isla de Rama Kay en territorio indígena. Para el año 2014 las primeras movilizaciones anti canal fueron discretas en su mayoría, para junio de ese año, se habían realizado 16 marchas anti canal, las más grandes fueron en San Miguelito y Punta Gorda, en total se llevaron a cabo marchas en 3 departamentos y participaron aproximadamente 286 comunidades y menos de 30, 000 personas.

Bajo este contexto, con el apoyo de ONG’s se logró recoger unas 28, 000 firmas de personas que rotundamente no se encontraban a favor del proyecto Canalero, así fue que se presentó una iniciativa en abril del 2016 una propuesta para derogar la ley 840. El argumento de los campesinos es derogar la ley 840 que pretende expropiar las tierras a una parte de los campesinos. Mientras este era el contexto para los campesinos e indígenas del sur, en el centro norte los líderes campesinos e indígenas afirman no sentirse representados por Francisca Ramírez y menos por Medardo Mairena. El presidente del pueblo originario de Jinotega Miguel Gómez (2016) dice que:

“Nosotros como indígenas hemos apoyados todas las luchas de reivindicación social a las mujeres rurales y urbanas, además de luchar por el respeto de los territorios ancestrales de nuestros pueblos más, sin embargo, no nos identifica la lucha anti canal porque soñamos con el desarrollo de Nicaragua”.

Así fue que empezaría la difícil crisis política y social de Nicaragua de abril 2018, cuando un incendio en la reserva Nutual Indio Maíz, fue mediatizado por una ONG’s apoyados por los intereses de los medios de comunicación de la oposición, rápidamente desprestigiaría las acciones del gobierno sandinista para control el voraz incendio que calcinaría el 3% de la reserva de biosfera. Posteriormente, se publicó las transformaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad

Social (INSS), sin embargo, las transformaciones al seguro social se venían abordando meses atrás con todas las partes involucradas y en especial con el FMI quien no dudo en proponer un paquetazo neoliberal que el gobierno sandinista lo rechazó por completo.

Con ello, salen en todos los medios de comunicación algunos analistas y economistas de la oposición que afirmaron que las medidas eran insostenibles para salvar al seguro social. Una vez, que los medios de comunicación masivos crearon la matriz de opinión, con ellos vino la desinformación y la manipulación, de esta forma, fue que la comunicación fue sustantivo durante los siguientes meses, porque las redes sociales sirvieron de plataforma y los grupos de WhatsApp fungieron como las herramientas de los autos convocados. Quienes en abril encontraron una organización anti canal muy bien cohesionado y capacitadas, bajo el contexto los universitarios de la UCA fueron de los primeros en manifestarse. Al mismo tiempo, diferentes activistas de partidos políticos oportunistas, no perdieron el tiempo y empezaron a realizar su trabajo de lucha de ideas, este era el clima que persistía en las calles, instituciones, oficinas, casas y universidades.

En referencia a las reformas del INSS una pequeña parte de los pensionados reclamaron las transformaciones tanto en León como en Managua, acompañado por jóvenes ambientalistas miembros de ONG’s y del partido político MRS. Para el 19 de abril del 2018 la sociedad nicaragüense se encontraba alienada por la propaganda de los medios opositores tanto nacionales como internacionales, muchas personas de Wiwili y Bocay no entendían lo que sucedió, mientras las movilizaciones juveniles empozaban a darse en la UCA y la UNA. Posteriormente, se empezaron a levantar pequeñas marchas en la ciudad de León, Matagalpa, Managua y Masaya. No obstante, en los municipios de Wiwili y Bocay los habitantes no sabían perfectamente lo que sucedía en la capital, según la entrevistada Karolina Acevedo (2018) dice que:

“Nosotros en Wiwili estábamos desinformados, en esos días se creó una cortina de humo que no permitió a muchos compañeros reaccionar a lo que se nos venía encima. Todas las personas manejaban diferentes criterios porque los números de WhatsApp fueron ocupados como la herramienta de Fake News”.

A los tres días el gobierno de Daniel Ortega decidió derogar las Reformas al Instituto Nicaragüense de

Ciencias de la Educación y Humanidades

Seguro Social, no obstante, empezaron los asesinatos en las calles de jóvenes entre ellos Álvaro Conrado quien andaba repartiendo agua cerca de las instalaciones de la UNI y fue herido de gravedad durante las protestas, los estudiantes y la Prensa escrita y levísima nacional e internacional condenaron los hechos y sin investigación alguna le echaban la culpa al gobierno, según el opositor Alberto Luna (2018) dice que:

“La protesta nuestra empezó con el incendio a Indio Maíz, después pasamos a las reformas al INSS, luego fue por los asesinatos del gobierno Orteguista”

En medio de la crisis se realizó el primer diálogo nacional, mismo que fue utilizado como show mediático contra el presidente Daniel Ortega, al mismo tiempo, el joven Lester Alemán mal asesorado le gritó al mandatario exigiéndole su renuncia, pese a la difícil situación política y social, el presidente dio la orden a la Policía Nacional de acuartelarse en todo el país y al Ejército le prohibió salir a las calles. Una vez acuartelada la Policía Nacional, los jóvenes e insurgentes controlaron las calles de las principales ciudades del país, en los primeros días los tranques contaban con ocho a diez chavalos estudiantes los cuales poco a poco, iban a desaparecer quedando netamente los opositores partidarios, sandinista volteados y chavalos desocupados conocidos como “vagos” que en los primeros días les pagaban 500 córdobas. Según un protagonista de los tranques en Matagalpa Hamilton Montenegro (2018) dice que:

“Estuve en el tranqué de la calle ocho en Matagalpa, donde nos pagaban 500, 400, 200, 100 pesos por estar ahí, recuerdo que hasta la comida nos la llevaba una Concejal por el CXL, PLC y ONG’s quienes estaban dirigiendo los tranques con otras personas disidentes del FSLN”

Como consecuencia de los tres meses de acuartelamiento a la Policía Nacional se llegó a tener un saldo de 198 personas fallecidas víctimas del terrorismo durante el periodo del 19 de abril al 25 de julio, entre ellos 192 hombres y 7 mujeres. También, según los datos de la Policía Nacional 253 personas fueron fallecidas por muertes homicidas, entre los que tenemos 233 varones y 20 mujeres que según la fuente perdieron la vida por actividades delictivas comunes. Los municipios de Wiwili y Bocay no presentaron víctimas producto de la crisis política del país, posteriormente fue que dieron enfrentamientos entre simpatizantes sandinista y de la

oposición quienes se enfrentaron con armas de fuego.

Mientras el gobierno de Nicaragua y la empresa privada cuantifica en más de 1000 millones de dólares en pérdidas económicas desde la crisis nicaragüense, la cual había dejado a más de 300 presos políticos y políticos presos en el sistema Penitenciario, sin embargo, el presidente Daniel Ortega decidió aprobar una ley de amnistía que favoreciera a todos los detenidos durante el intento de golpe blando. De esta manera, el país sigue recuperando la normalidad política, sin embargo, la crisis económica es latente incluso un año después de las protestas y como siempre las clases sociales afectadas son la clase media y baja mientras empresarios del COSEP siguen divididos y la Iglesia Católica haciendo proselitismo político contra el gobierno sandinista sin que hasta ahora tengan éxito. Al mismo tiempo, el sandinismo se ve más fuerte que nunca y con sus militantes y simpatizantes más activos que nunca desde las plataformas de opinión pública y redes sociales.

CONCLUSIONES

La frontera agrícola, los movimientos campesinos e indígenas del norte de Nicaragua sigue siendo un tema de interés nacional, debido a que en los últimos 40 años han demostrado que la rebeldía sigue siendo uno de sus principales elementos, como el profundo deseo de autonomía no solo del mercado, sino del acceso a la tierra, es ahí uno de los principales choques con los grupos indígenas protectores de los recursos naturales de sus tierras. Así en los años noventa vemos que los campesinos exigían promesas nunca cumplidas por los gobiernos neoliberales, crearon los rearmados y los recontra contras para presionar de algún modo a los gobiernos de turno, sin embargo, estos fueron ignorados por completo.

De igual manera, los indígenas Miskitu y Mayangna de Wiwili y Bocay no fueron reivindicados sus peticiones hasta el 2008 cuando llegó al poder el comandante Daniel Ortega quienes actualmente tiene una pugna por el territorio indígena y las parcelas de los campesinos mestizos. Los gobiernos territoriales indígenas de Wiwili y Bocay continúan frenando la frontera agrícola del campesino, mientras el comercio penetra en las

Ciencias de la Educación y Humanidades

regiones protegidas de Bosawas. Así es que desde su territorio siguen enarbolando una bandera de protección de los recursos naturales, culturales y animales, en contra oposición a la modernidad y a las formas de explotación capitalista.

Durante el gobierno de Daniel Ortega, los avances para el país son muchos e incontables y muy pocos los errores, es por eso que dentro de los principales temores de los movimientos campesinos de Wiwili y Bocay es que sean desalojados por los gobiernos indígenas territoriales, no obstante, estos se muestran indiferentes a las luchas campesinas contra el canal Interoceánico y el incremento de la inversión extranjera en distintas industrias extractivas, además, de la extranjerización de las propiedades como pasa en Rivas. En el actual contexto, después de la crisis política y social del año 2018 podemos decir, que el FSLN salió victorioso por la astuta decisión del presidente Daniel ha acuartelar la policía y dejar que la sociedad con caravanas de policías voluntarios como bien lo establece la constitución, desmovilizara 3 meses de tranques que estaban sumiendo al país otra vez a la miseria y hambruna. Esto unificó a la familia sandinista de una manera más ágil y audaz quienes están dispuesto a continuar defendiendo los avances sociales y las reivindicaciones logradas durante 12 años de gobierno.

REFERENCIAS

Biggs, J. (2005). *Calidad del aprendizaje universitario*. Madrid: Narcea.

Brockbank, A. & McGill, I. (2002). *Aprendizaje reflexivo en la educación superior*. Madrid: Morata.

Brown, S. & Glasner, A. (2003). *Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques*. Madrid: Narcea.

Cabani, M.L. & Carretero, R. (2003). *La promoción de estudiantes estratégicos a través del proceso de evaluación que proponen los profesores universitarios*. En C. Monereo y J.L. Pozo, *La universidad ante la nueva cultura educativa: enseñar y aprender para la autonomía* (pp.173-190). Madrid: Síntesis.

De Miguel, M. (2005). *Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior*. (Proyecto EA2005-0118). Servicio de Publicaciones: Universidad de

Oviedo. Recuperado de http://www.mec.es/univ/proyectos2005/EA_2005-0118.pdf

Sharp, S. (2006). *Deriving individual student marks from a tutor's assessment of group work*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 31 (3), 14.

Sans, A. (2005). *La evaluación de los aprendizajes: construcción de instrumentos*. Cuadernos de docencia universitaria, 2. Barcelona: Octaedro-ICE.

Sigalés, E. & Badía, A. (2004). *Formación universitaria y TIC: usos y nuevos roles*. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 1 (1), 1-6.

Taras, M. (2005). *Assessment –sumative and formative- some theoretical reflections*. *British Journal of Educational Studies*, 53 (4), 466-478.

Villardón, L. (2006). *Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias*. *Educatio*. Siglo XXI, 24, 15-35.

Walsh, A. (2007). *An exploration of Biggs' constructive alignment in the context of work-based learning*. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 32 (1), 9.